



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADA SUSTANCIADORA**  
**ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA**

Medellín, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Radicación n°.	05360 31 03 002 2018 00337 01
Proceso.	Ejecutivo
Demandante.	Rodrigo Gonzalo Uribe López
Demandados.	Antonio José Castaño Suaza y otra.
Procedencia.	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí
Radicado interno:	070-23
I.V. Nro.	034-23

**ASUNTO A RESOLVER**

En el proceso de la referencia, la parte demandante recurrió en apelación la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí el 26 de julio de 2023,alzada admitida el 22 de agosto de la misma anualidad.

En memorial del 29 de agosto de 2023, el togado que asiste los intereses del ejecutante, solicitó la práctica de la prueba consistente en que se dispusiera que el juzgado de conocimiento certificara los períodos de tiempo en los cuales se presentó suspensión de términos por cualquier motivo en el presente proceso.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**1. De la prueba judicial.** La prueba judicial es el acto procesal que tiene como finalidad arribar al operador jurídico al convencimiento de los hechos objeto de controversia. En línea de principio, corresponde a los contendientes acreditar los hechos o excepciones que aduzcan, según el papel que desenvuelvan, en aras de

lograr la prosperidad de sus súplicas.

Nuestra normativa procedimental civil establece ciertas exigencias que deben satisfacerse al momento de solicitar y practicar el medio probatorio, a efectos de que el funcionario pueda no solo decretarla sino también apreciarla al tiempo de su valoración. Tales exigencias son clasificadas por el doctrinante Azula Camacho<sup>1</sup> en: “Requisitos *Subjetivos*”, que se refieren a los sujetos y tienen en cuenta fundamentalmente dos aspectos “*LA COMPETENCIA Y LA LEGITIMACIÓN*”, la primera atañe al funcionario y la segunda a las partes; “*REQUISITOS OBJETIVOS*” se refieren a la materia u objeto del proceso y están constituidos por “*la conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal*” y “*REQUISITOS DE ACTIVIDAD*”, que se refiere a las circunstancias de “*lugar, tiempo y modo*”.

Ahora, el legislador estableció, como regla general, que las pruebas que se pretendan hacer valer deben solicitarse, aportarse, decretarse y practicarse en el curso de la primera instancia, en las oportunidades expresamente contempladas.

Sin embargo, en el canon 327 del Código General del Proceso, se enunciaron determinadas circunstancias en las que excepcionalmente el operador de segundo grado se encuentra facultado para decretar y practicar pruebas, así:

- “1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.*
- 2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.*
- 3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.*
- 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.*
- “5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior.”*

Por tanto, para la procedencia del decreto y práctica de los medios probatorios en segunda instancia, es menester que se satisfaga alguno de los supuestos taxativamente señalados.

---

<sup>1</sup> En su obra “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO”. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1998. Pág. 51 y ss.

2. En el sub júdece, la *a quo* decretó la prueba ahora deprecada por el apoderado del ejecutante, tal y como se verifica en la audiencia llevada a cabo el 18 de abril de 2023, sin embargo, la certificación petitionada no aparece incorporada al expediente digital.

Y en efecto, conforme a lo establecido en el numeral 2º del artículo 327 del C. General del proceso, el decreto de pruebas en segunda instancia procede cuando habiendo sido ordenada en primera, se dejaron de practicar **sin culpa de la parte que la pidió**, circunstancia esta última que no se cumple dentro del presente asunto, puesto que esta dejó de realizar las acciones correspondientes para que el elemento material probatorio fuera incorporado al proceso.

Es decir, dejó que el proceso se profiriera la sentencia de primer grado, sin antes haber advertido la ausencia de la prueba por él petitionada y decretada en debida forma, a través de los medios legalmente autorizados para ello; esto es, cuando se declaró por el juzgado la culminación del período probatorio, por medio de los recursos procedente, previo al traslado para presentar los alegatos de conclusión, o incluso, como causal de nulidad. No obstante, a pesar de haberse presentado, esta se saneó ante la falta de su alegación por parte del interesado.

Ahora, de otro lado, si se pensara que la prueba puede decretarse de oficio, considera la Sala que esta resulta inútil para el caso concreto, toda vez, si lo que se busca es determinar los períodos en que se presentó suspensión de términos en el proceso, ello consta en circulares del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, los cuales son de público conocimiento, entonces perfectamente pueden y deben ser consultados para ser tenidos en cuenta sin restricción alguna al momento de realizar cómputos procesales.

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

### **RESUELVE**

**PRIMERO. NEGAR** la incorporación y práctica del medio probatorio reclamado aportado por la parte demandante, por lo dicho en la parte motiva.

**SEGUNDO.** En firme la presente decisión, continúese con el trámite del recurso de apelación, conforme se dispuso en auto del 22 de agosto de 2023; y, una vez

vencidos los traslados, ingrédese nuevamente el proceso a despacho para desatar la alzada.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA**  
**Magistrada**

**Firmado Por:**

**Alba Lucia Goyeneche Guevara**

**Magistrada**

**Sala Civil**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0226ff6af5ea8b5e7b8890fa6ab154f74f8776a1477651eef31d2c6843cf8002**

Documento generado en 05/09/2023 08:05:22 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**